

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Septiembre 8 de 2022: Al despacho el proceso en contra de **JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ** identificado con C.C. No. 79.524.861, informando que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas – Jurisdicción Especial para la Paz – JEP -, en la Resolución No. 2796 del 3 de agosto de 2022 dispuso: “(...) **REMITIR** el proceso penal con radicado 110016000102201700156 al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facativá, advirtiéndole que deberá continuar vigilando la condena impuesta bajo dicho radicado al señor José David García Fernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.524.861. Por tanto, corresponde a dicha autoridad resolver la solicitud de reconocimiento de redención de pena y de sustitución de la pena de prisión intramural por una domiciliaria elevada por el señor García Fernández (...)”.

Por lo anterior, este despacho procede a dar cumplimiento a lo ordenado por la mencionada Corporación y emitirá pronunciamiento acerca de la solicitud de prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., y el reconocimiento de redención de pena, invocado por el condenado, conforme la documentación allegada por las directivas de la CPMMSFFA PONAL Facativá Cundinamarca, recibidas a través del correo institucional el día 5 de mayo y 8 de agosto de 2022. Sírvase proveer.

LUZ ESTELA SIERRA ROMERO
Oficial Mayor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Septiembre ocho (8) de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0472

CUI	110016000102201700156
Número Interno:	2021-0136
Sentenciado:	JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ
Identificación:	C.C. No. 79.524.861
Delito:	COHECHO PROPIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCION CONTINUADA
Sitio de Reclusión:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL
Decisión:	CONCEDE PRISIÓN DOMICILIARIA ART. 38G DEL C.P. RECONOCE REDENCION TRABAJO

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Ingresa al Despacho en la presente oportunidad el proceso de la referencia seguido en contra de **JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ** identificado con C.C. No. 79.524.861 quien se encuentra purgando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, con la documentación emitida por el mencionado penal para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P.

2.- ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las norma de la Ley vigente.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos **desde el mes junio de 2007 hasta mayo de 2009** y preacuerdo aprobado el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 30 de julio de 2019 CONDENÓ a **JOSÉ DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ** a la pena de **OCHENTA Y OCHO (88) MESES, VEINTISÉIS (26) DÍAS DE PRISIÓN, multa de 55.55 SMLMV** y a la pena accesoria para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la pena principal como autor responsable del delito de **COHECHO PROPIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTINUADA (art 405 C.P)**. NEGÓ a infractor la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Penal, mediante decisión del 27 de septiembre de 2019 le modificó el numeral 1º de la parte resolutive de la sentencia condenatoria, en el sentido de aclarar que la multa impuesta equivale a 55.55 SMLMV para el año 2009. Adicionó que el condenado no tiene derecho a la libertad condicional o a la prisión domiciliaria y en lo demás la confirmó, quedando ejecutoriado el fallo condenatorio el 13 de octubre de 2019

JOSÉ DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ ha venido descontando por las presentes diligencias **desde el 30 de julio de 2019¹**.

El homólogo 18 de Bogotá D.C., avocó conocimiento del proceso el 27 de noviembre de 2019, mediante proveído del 28 de diciembre de 2020, negó al infractor la prisión domiciliaria – ley 750 de 2002 -, y por auto del 16 de febrero de 2021 ordenó la remisión del expediente a esta oficina judicial.

Este Juzgado avocó conocimiento del proceso el 20 de mayo de 2021, mediante auto del 15 de julio de 2021, reconoció redención de pena 6 meses y 22.6 días, por decisión del 30 de agosto de 2021, aprobó el beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas.

Mediante proveído del 13 de diciembre de 2021, este despacho ordenó al asistente social del Juzgado que por medios virtuales realizara la visita socio-familiar en la Transversal 5 C No. 3-18 Acacias Barrio Quintanares del municipio de Soacha Cundinamarca y emitiera el concepto pertinente a las condiciones familiares y habitacionales del señor **JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ** y especialmente de la veracidad de su condición de padre cabeza de familia.

Por auto del 26 de enero de 2022 reconoció redención de pena de 2 meses y 13.75 días y por auto del 28 de la misma anualidad NEGÓ la prisión domiciliaria – Ley 750 de 2002 y el artículo 314-5 del C.P.P., a través de auto del 14 de junio de 2022 se dispuso decretar la corrección de actos irregulares conforme lo estipulado en el artículo 15 inciso 2º de la Ley

¹ Acta de derechos del capturado – folio 11 archivo 007 – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

600 de 2000, del interlocutorio No. 0071 del 28 de enero por el cual este despacho negó la prisión domiciliaria como padre cabeza de familia, como quiera que quedó anotado el CUI 110016000013201511069, **siendo correcto CUI 110016000102201700156**

Conforme a la petición presentada por la Investigadora Criminal de la Unidad de Investigación y Acusación – Jurisdicción Especial para la Paz, este Juzgado dispuso por auto del 14 de junio de 2022, remitir la actuación a la Sala de definición de Situaciones Jurídicas – JEP -, al haberse acogido el infractor a ese sistema especial de justicia, advirtiéndose que se encontraba pendiente resolver la solicitud de prisión domiciliaria art. 38G del C.P. y reconocimiento de redención de pena.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas – Jurisdicción Especial para la Paz – JEP -, en la Resolución No. 2796 del 3 de agosto de 2022 dispuso: "(...) **REMITIR** el proceso penal con radicado 110016000102201700156 al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, advirtiéndole que deberá continuar vigilando la condena impuesta bajo dicho radicado al señor José David García Fernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.524.861. Por tanto, corresponde a dicha autoridad resolver la solicitud de reconocimiento de redención de pena y de sustitución de la pena de prisión intramural por una domiciliaria elevada por el señor García Fernández (...)" (subrayado nuestro)

En esta oportunidad ingresa al despacho con la documentación allegada por la dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, para el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., y reconocimiento de redención de pena del infractor

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020² del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: "[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

² ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*³.

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud de prisión domiciliaria y reconocimiento de redención de pena impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, conforme los Acuerdos expedidos por el

³ CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007.

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos **desde el mes junio de 2007 hasta mayo de 2009**, el sentenciado **JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ** fue investigado y juzgado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 1453 de 2011) y 906 de 2004.

4.2. DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

*“(...) **ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN.** <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (...)”*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

“(...) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (...)”

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

*“(...) **ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.** El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (...)”

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18468939	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020	Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – Regional Central	488	Sobresaliente	Ejemplar
18436995	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022	CPMMSF FACATATIVA – Regional Central	563	Sobresaliente	Ejemplar
18486828	Del 1 de abril al 30 de abril de 2022	CPMMSF FACATATIVA – Regional Central	196	Sobresaliente	Ejemplar
18574327	Del 1 de mayo al 30 de junio de 2022	CPMMSF FACATATIVA – Regional Central	392	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			1633		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **1633 horas** por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **CIENTO DOS PUNTO CUARENTA Y TRES (102.43) DÍAS** es decir **TRES (3) MESES y DOCE PUNTO CUARENTA Y TRES (12.43) DÍAS** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

4.3. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA – ART. 38G DEL C.P.

Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., se adjunta la documentación en la cual se relaciona los datos de contacto para el disfrute de la prisión domiciliaria y manifiesta el condenado en el escrito de solicitud que el inmueble para continuar con el cumplimiento de la pena se localiza en la Transversal 5C No. 3-18 barrio Quintanares, Agrupación Residencial Acacias 1 en Soacha Cundinamarca, indicando que es en el mismo domicilio al cual se realizó la visita para que se concediera el beneficio administrativo de hasta 72 horas concedido por este Juzgado mediante auto No. 0447 de fecha 30 de agosto de 2021.

Adjunta: Recibos de servicios públicos; declaraciones Extrajuicio de las señoras Valeria, Stefan García Corredor, Liliana del Pilar García Fernández y José Humberto Arias; Certificaciones calificación de conducta; Certificado No Fugas, Ni tentativas de Fugas durante el tiempo de reclusión; Certificación que NO le figuran sanciones disciplinarias durante el tiempo de reclusión expedidas por las directivas de la CPMMSFFA PONAL FACATATIVA.

4.4. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES.

4.4.1 Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 68 A del C.P.

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, compitiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las



soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer ⁴.

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **COHECHO PROPIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTINUADA (art 405 C.P)**, – el legislador, en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 68 A de la Ley 1709 de 2014, así como el art 26 de la Ley 1121 de 2006, o como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Es de resaltar la obligatoriedad del precedente Constitucional y las consecuencias de su desconocimiento por el suscrito Funcionario judicial, ello es contundente, como quiera que la misma Corte Constitucional en sentencia T-388 de mayo 28 de 2009, siendo M.P. Humberto Sierra P., ha sostenido:

“Los jueces que contradigan fallos de Constitucionalidad o desconozcan jurisprudencia de las altas cortes en violación de preceptos constitucionales o de un acto administrativo en general, incurrir en prevaricato por acción.”

Pues bien, con la entrada en vigencia de la **Ley 1142 de 2007**, fue incorporado al Código Penal un **nuevo artículo (68A)** reglamentario de la exclusión de beneficios y subrogados penales para internos que se encontraran en una situación determinada, en aquel momento era *cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores*.

Posteriormente el artículo 68A incorporado al Código Penal por la Ley 1142 de 2007 fue objeto de modificación por el **artículo 28 de la Ley 1453 de 2011** que determinó que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

“ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.

<Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.

PARÁGRAFO. *El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.*

La norma en mención –**artículo 68A del Código Penal**- volvió a ser objeto de modificación con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual fueron incorporados otros delitos como los delitos contra la administración pública a fin de ser excluidos de beneficios y/o subrogados penales.

⁴ Curso de Criminología, 7ª edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

ARTÍCULO 68A. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; (...)

“...Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos...”

Finalmente, **el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014** (Ley que entró en vigencia el 20 de enero de 2014) incorporó unas nuevas modificaciones al artículo 68A del Código Penal, aduciendo que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

*“ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES. **No se concederán**; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; **ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo**, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*

*<INCISO 2> Tampoco quienes hayan sido condenados por **delitos dolosos contra la Administración Pública**; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal. ...”*

Recientemente se ha modificado con la Ley 1773 de 2016, y el inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1944 de 2018. Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el señor **JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ** como **COHECHO PROPIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTINUADA (art 405 C.P)**, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo a la libertad condicional (art 64 CP), **NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

38G del C.P., motivo por el cual este funcionario entrará a estudiar la petición invocada por el condenado de la prisión domiciliaria por el mencionado artículo.

Sobre este punto señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

“...No obstante, dicha regla tiene su excepción, esto es la consignada en el parágrafo 1 del mismo artículo y según la cual “Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código.” Es decir, cuando la petición de prisión domiciliaria se invoque con fundamento en el artículo 38G penal, no es dable negarla con fundamento en las exclusiones consignadas en el artículo 68A del mismo estatuto, sino que deberá ceñirse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma...”⁵

4.5. SOBRE LA PRISIÓN DOMICILIARIA ART 38G del C.P.

El Despacho debe iniciar su exposición advirtiendo que el día 20 de enero de 2014 se sancionó la Ley 1709 de 2014 *“Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”*, misma que empezó a regir desde el momento mismo de su promulgación. El artículo 5° de dicha disposición adicionó el artículo 7 A de la Ley 65 de 1993, en el sentido de señalar que el Juez que vigila el cumplimiento de la condena de oficio, a petición del recluso o de su apoderado judicial, deberá reconocer los mecanismos sustitutivos de la pena, en aquellos casos que se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

Al respecto señala la norma:

“(...) Artículo 7 A. obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad: Los jueces de Penas y Medidas de Seguridad tiene el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.

Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la Defensoría Pública o de la procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respectivos requisitos. (...)” (Subrayado fuera de texto).

La mentada Ley, a través de su artículo 28, adicionó el sustituto de la Prisión Domiciliaria en el sentido de agregar el artículo 38G al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual por sustracción de materia modifica el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. Dicha norma estatuye:

“(...) Artículo 28. Adicionase un artículo 38G a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor: Artículo 38G. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurren los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B del presente Código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: Genocidio, contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada;

⁵ CSJ RAD Radicado 45900 del 1 de febrero de 2017, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido; uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso segundo del artículo 376 del presente código.(...)"

El mencionado artículo 38 G., **fue objeto de modificación recientemente el 30 de diciembre de 2019, por la ley 2014**, la cual a través de su artículo 4 agrego conductas punibles cometidas en contra de la Administración Pública, quedando así:

Artículo 38G, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurren los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

Parágrafo. los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.

A su vez debe ser analizado en conjunto con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 38 B (creado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014), que indica:

"(...) Artículo 23. Adicionase un artículo 38B a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor:
Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:

1. (...)
3. QUE SE DEMUESTRE EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL CONDENADO
4. QUE SE GARANTICE MEDIANTE CAUCIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

- A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial;
- B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;
- C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;
- D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (...)" (Resalta fuera de texto)

De igual forma, debe advertirse que el numeral 7° del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, obliga a este funcionario dar aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, por ende, se torna imperioso estudiar si el sentenciado cumple con los nuevos requisitos dispuestos para acceder al mecanismo sustituto de la prisión, y en caso afirmativo decretar el traslado a su lugar residencia previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para gozar del sustituto.

Por último, se trae a colación el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014 que como norma rectora señala lo siguiente:

"(...) Parágrafo 1°. En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa (...)" (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar los subrogados en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Al verificar este requisito, se tiene que conforme a la sanción impuesta por el fallador y de la cual existió un preacuerdo aprobado por las partes, en la que el condenado en presencia de su defensor de manera libre, consciente, voluntaria, espontánea e informada aceptó el delito endilgado de **COHECHO PROPIO en la modalidad de ejecución continuada** y dentro de los relacionados aunque aparece en la norma, dicha modificación fue adicionada por la Ley 2014 de 2019 que fue sancionada⁶ ese 30 de diciembre, no lo cobija pues los hechos de esta materia datan del **el mes junio de 2007 hasta mayo de 2009** y en aquel momento la norma no contemplaba la inclusión de este tipo penal.

4.6. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA.

JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **desde el día 30 de julio de 2019**, lo que implica que a hoy lleva **37 meses y 25 días**.

El condenado cuenta con un total de redenciones de pena de **12 meses y 18.78 días**, reconocidas así:

- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0391 del 15 de julio de 2021, reconoce 6 meses y 22.6 días.
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0042 del 26 de enero de 2022, reconoce 2 meses y 2 días.
- JEPMS Facatativá, en el auto interlocutorio No. 0472 de la fecha, reconoce 3 meses y 12.43 días.

De la suma de las anteriores cifras, da como resultado que el interno ha purgado un total de **50 meses y 13.78 días** de la pena de principal impuesta.

Al analizar la norma sobre el primer requisito, factor objetivo, se tiene que el condenado debe haber cumplido la mitad de la condena impuesta. Al efecto el señor **JOSE DAVID GARCIA**

⁶ Diario Oficial No. 51.182 de 30 de diciembre 2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

FERNANDEZ fue condenado a la pena principal de prisión de **88 meses y 26 días** por lo que la mitad sería **44 meses y 13 días**

Por consiguiente, el condenado a hoy por el tiempo físico, más las redenciones reconocidas lleva purgando **50 meses y 13.78 días, por lo cual cumple con el factor objetivo exigido en la norma.**

En cuanto a los presupuestos de los numerales 3º y 4º del artículo 38 B, se tiene:

4.6.1. ARRAIGO FAMILIAR:

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

Al efecto, se tiene que el infractor en el escrito de solicitud manifiesta que el inmueble para continuar con el cumplimiento de la pena se localiza en la **Transversal 5C No. 3-18 barrio Quintanares, Agrupación Residencial Acacias 1 en Soacha Cundinamarca**, indicando **que es en el mismo domicilio al cual se realizó la visita para que se concediera el beneficio administrativo de hasta 72 horas concedido por este Juzgado mediante auto No. 0447 de fecha 30 de agosto de 2021.**

Para certificar el arraigo familiar y social, adjunta los recibos de servicios públicos; declaraciones Extrujuicio de las señoras Valeria, Stefan García Corredor, Liliana del Pilar García Fernández y José Humberto Arias; Certificaciones calificación de conducta; Certificado No Fugas, Ni tentativas de Fugas durante el tiempo de reclusión; Certificación que NO le figuran sanciones disciplinarias durante el tiempo de reclusión expedidas por las directivas de la CPMMSFFA PONAL FACATATIVA.

Ahora bien, al tenerse en cuenta el estudio del arraigo realizado por el Asistente Social de este Juzgado, mediante el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 20 de diciembre de 2021, se observa lo siguiente:

“(…) RESULTADOS

SITUACIÓN ENCONTRADA

Los días 16 y 17 de diciembre de 2021, fueron realizadas dos entrevistas telefónicas de una hora y treinta minutos de duración al abonado de celular número 3118529371. Se trata del

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

número celular de la joven VALERIA GARCÍA CORREDOR, hija del señor condenado. Se realizó encuadre sobre los fines de la entrevista y la importancia de la información relativa al grupo familiar y sobre las condiciones habitacionales y sociales de las hijas del señor condenado JOSÉ DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ, particularmente la menor AMMY JIRETH GARCÍA CORREDOR.

Se realizó encuadre sobre los fines de la entrevista y la importancia de la información relativa al grupo familiar y sobre las condiciones habitacionales y sociales de las hijas del señor condenado JOSÉ DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ, particularmente la menor AMMY JIRETH GARCÍA CORREDOR.

Atendió la entrevista telefónica la joven VALERIA GARCÍA CORREDOR, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.073.714.307, hija del señor condenado.

Previamente, por parte de VALERIA GARCÍA CORREDOR se remitió la información relativa al inmueble propiedad de la familia, junto con recibos de servicios públicos del mismo lugar.

De igual modo, fue enviado informe de atención psicológica de la menor AMMY JIRETH GARCÍA CORREDOR, fechado julio de 2020 y copia de la historia clínica de VALERÍA GARCÍA CORREDOR.

Refiere la señorita VALERIA que tiene 22 años, 23 en enero próximo, ocupación estudiante de administración de empresas en la Universitaria de Colombia y actualmente empleada en una inmobiliaria en la ciudad de Bogotá.

Comenta la entrevistada que el padre de familia, señor JOSÉ DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ está privado de la libertad desde julio de 2019 y que su señora madre falleció en julio de 2020, motivo por el cual desde esa fecha ha sido la cuidadora y adulta responsable de su hermana menor de edad de 14 años.

Manifiesta VALERIA GARCÍA CORREDOR que, como resulta lógico, el afrontamiento del encarcelamiento del padre y la posterior muerte de la madre han sido muy difíciles de sortear a nivel emocional. Encarar el rol de cuidadora de la hermana ha sido actividad que dicha joven ha tenido que afrontar sin tiempo suficiente para elaborar la pérdida de su mamá, razón por la cual ha sufrido trastornos en salud mental como ansiedad, depresión y problemas de sueño.

La joven VALERIA GARCÍA CORREDOR recibió atención médica y psiquiátrica y fue diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada y depresión y medicada con sertralina y zoplicona, fórmula médica que la joven no viene tomando actualmente pues teme volverse dependiente a los medicamentos.

El no uso del tratamiento trae como consecuencia que los síntomas persistan. VALERIA refiere estados de angustia e insomnio frecuente. Se le recomienda continuar con el tratamiento pues de lo contrario no habrá cambios en el estado de ánimo, también se le sugirió dialogar con el psiquiatra sobre la preocupación por los efectos adversos de los medicamentos, pues no es adecuado retirar el tratamiento por decisión suya.

Respecto al estado de salud mental de la menor AMMY JIRETH GARCÍA CORREDOR, la profesional tratante en 2020 asocia los problemas afectivos y emocionales al proceso de duelo con la pérdida de la mamá y los problemas familiares derivados del encarcelamiento del padre.

Al respecto, es necesario resaltar que el proceso de duelo es una respuesta emocional y afectiva normal ante las pérdidas significativas sufridas por las personas. Como resulta lógico en el presente caso tanto la adolescente como la joven hijas del señor condenado

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

afrontan importantes pérdidas, siendo un proceso inicial que normalmente tiene un curso de DOS (2) AÑOS.

La joven VALERIA manifiesta que, si bien existe la disponibilidad de redes de apoyo familiar, ella y su hermana han permanecido en la residencia que comparten puesto que los abuelos paternos y maternos son personas de la tercera edad y sus tías cuentan con otras responsabilidades familiares.

Durante el año pasado y este la menor ANNIE JIRETH asistió a clases de manera virtual. Si bien se reporta un desmejoramiento en el desempeño académico, la adolescente aprobó los años escolares. Así mismo, teniendo en cuenta los reportes allegados, ANNIE acudió a psicología algunas veces, pero, al parecer, ya no está recibiendo acompañamiento profesional.

La principal preocupación de VALERIA frente al cuidado de su hermana es que, debido a sus actividades laborales y sus estudios universitarios, ANNIE JIRETH permanece sola durante prácticamente todo el día.

La posibilidad de residir con los abuelos y otros familiares no se ha contemplado por ahora, señalando que la calidad de vida y bienestar serían más llevaderos en el lugar donde se encuentran.

Se conoció que los abuelos paternos son ASael GARCÍA y LUZ DARY FERNANDEZ, adultos mayores de avanzada edad residentes en el barrio Lucero Alto de Bogotá.

Los abuelos maternos son MANUEL CORREDOR y CECILIA CUESTA, residentes en Mosquera. Se conoció que el señor MANUEL labora como electricista de manera independiente.

Otros familiares son FRANCY CORREDOR, casada y madre de dos hijos y de profesión Contadora Pública, también residente en el municipio de Mosquera.

Igualmente, se refirió la señora PILAR GARCÍA, tía paterna, ocupación hogar, casada y residente en Soacha.

En tal sentido, existe una red de apoyo familiar, que se expresa permanece distante, pero la cual puede entrar a apoyar el cuidado y crianza de la menor de edad ANNIE JIRETH GARCÍA CORREDOR, aun en medio de sus propias preocupaciones y responsabilidades, más aun, teniendo en cuenta que el aspecto financiero de las hijas del señor condenado es cubierto por recursos propios de JOSÉ DAVID GARCÍA FERNANDEZ.

Debe resaltarse que el apoyo social y emocional no depende de la edad de las personas o su situación económica, sino que se refiere a la disponibilidad de contención y apuntalamiento, expresión de afecto y acceso a hacer catarsis (desahogarse). En pocas palabras, es contar con seres queridos dispuestos y responsivos.

CONDICIONES HABITACIONALES

*La vivienda en la cual residen las hojas del señor condenado está ubicada en la **Transversal 5C No. 3 - 18 Acacias I Urbanización Quintanares, Soacha (Cundinamarca).***

Se trata de una vivienda propiedad de la familia hace más de 20 años y perteneciente al estrato TRES.

El lugar de residencia se encuentra dentro de un conjunto cerrado que cuenta con portería 24 horas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

La casa de habitación es de dos plantas, cuenta con cuatro habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, corredor y patio de ropas.

La residencia cuenta con servicios públicos domiciliarios: energía-codensa, gas-vanti, acueducto y alcantarillado.

Las condiciones de habitabilidad encontradas son buenas, contando el lugar con buenas condiciones externas e internas. Así mismo los aspectos de seguridad reportados fueron positivos.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que los gastos son cubiertos principalmente por el señor condenado, persona quien al parecer contaría con una pensión.

Respecto a los gastos se encontró que mensualmente dicha familia gasta alrededor de un millón doscientos mil pesos en todo lo relativo a la economía familiar, principalmente alimentación, pago de servicios y otros.

Así mismo, actualmente la joven VALERIA se encuentra trabajando y sus ingresos los destina a pago de sus gastos universitarios.

La situación económica que fue observada en el ámbito familiar es de clase media, pues la familia cuenta con recursos económicos suficientes para el cubrimiento de necesidades básicas del grupo. El tema económico no es una preocupación importante para esta familia ni actúa como estresor.

CONCEPTO

El señor condenado JOSÉ DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ es padre de dos hijas, una de ella menor de edad (ANNIE YIRETH), la otra joven universitaria y actualmente vinculada laboralmente.

Las hijas del señor condenado cuentan con un grupo familiar extensivo constituido por abuelos maternos, paternos y tías, personas que, en medio de sus propias circunstancias, se constituyen en red de soporte afectivo, social y emocional para aquellas.

Las hijas del señor JOSÉ DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ, presentan afectaciones en salud mental asociadas con el proceso de duelo que afrontan por la pérdida de la señora madre, situación que agravó la situación familiar debido al encarcelamiento del padre. Ambas hijas realizaron tratamientos al respecto, pero por el momento no acuden periódicamente a dichas atenciones, se espera remisión sistemática de síntomas con el transcurrir del tiempo.

Respecto al lugar donde residen las hijas del condenado, se cuentan con condiciones adecuadas condiciones de habitabilidad y seguridad (...).

Y todo esto en razón a que el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial que en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, deberán ejercer un control material del cumplimiento de la condena, pues así lo ha determinado la Ley a través del artículo 29 A de la Ley 65 de 1993 el cual textualmente reza:

ARTÍCULO 29A. EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA. <Artículo adicionado por el artículo 8 del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la sentencia que impone la pena de prisión y dispuesta su sustitución por prisión domiciliaria por el juez competente, este enviará copia de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

misma al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, quien señalará, dentro de su jurisdicción, el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y adoptará entre otras las siguientes medidas:

- 1. Visitas aleatorias de control a la residencia del penado.*
- 2. Uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas.*
- 3. Testimonio de vecinos y allegados.*
- 4. Labores de inteligencia.*

Durante el cumplimiento de la pena el condenado podrá adelantar las labores dirigidas a la integración social que se coordinen con el establecimiento de reclusión a cuyo cargo se encuentran y tendrá derecho a la redención de la pena en los términos establecidos por la presente ley.

En caso de salida de la residencia o morada, sin autorización judicial, desarrollo de actividades delictivas o incumplimiento de las obligaciones inherentes a esta pena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dará inmediato aviso al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para efectos de su revocatoria.

4.6.2. La concesión de este mecanismo será posible si no está incurso en algunos de los delitos relacionados en dicho articulado.

Al verificar este requisito, se tiene que conforme a la sanción impuesta por el fallador y la relación del artículo para la época de los hechos no aparecen dentro del mismo el delito endilgado al condenado, esto es **COHECHO PROPIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTINUADA (art 405 C.P.)**.

El artículo analizado señala que quienes hayan sido condenados por los delitos allí mencionados les serán negados la concesión del sustituto penal. Empero, si no está inmerso en alguna de las causales de improcedencia, el juez solo deberá analizar que cumpla con los demás presupuestos legales. En efecto en aquella calenda una vez creado el artículo 38 G del C.P. en la relación de los tipos penales excluidos para su concesión no aparecen los delitos endilgados al aquí condenado, cobijándolo el principio de favorabilidad.

“ARTÍCULO 38G. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurren los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2o del artículo 376 del presente código.”

4.6.3. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia.

Dentro de la actuación allegada no aparece que se iniciara incidente de reparación de parte de las víctimas, motivo por el cual cumple con este requisito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

5. CONCLUSIÓN

En atención a lo dispuesto, se observan cumplidos todos los presupuestos contenidos en el artículo 38 G adicionado por la Ley 1709 de 2014, para que continúe purgando su pena en el lugar del domicilio, esto es, en la **Transversal 5C No. 3-18 barrio Quintanares, Agrupación Residencial Acacias 1 en Soacha Cundinamarca. Celular 3118529371.**

No obstante, si la dirección de residencia de sus familiares varió recientemente y como consecuencia el sentenciado deba cumplir la privación de la libertad en lugar distinto al señalado, deberá informarse inmediatamente a este Juzgado.

Para hacer efectiva esta sustitución, el condenado deberá suscribir diligencia de compromiso en los términos establecidos en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y deberá constituir caución prendaria en el equivalente a **DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, en atención a sus condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal, en las que se estableció que **JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ** carece de recursos económicos dado al periodo de tiempo que permaneció privado de la libertad, se infiere entonces que no se encuentra en capacidad de sufragar sumas mayores a la antes establecida. Además, teniendo en cuenta el amplio periodo que permanecerá privado de la libertad, se advierte que se impone esta cantidad como justa para garantizar las obligaciones que la concesión del sustituto conllevan. Dicha suma puede ser cancelada en dinero en efectivo a través de título judicial, según lo dispone el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).

Constituida la caución y suscrita la diligencia de compromiso se dispondrá que el Instituto penitenciario y carcelario donde actualmente se encuentra recluso proceda al traslado a su domicilio, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

Teniendo en cuenta que el sentenciado se encuentra descontando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a dicha Dirección, con el fin de notificar personalmente la presente decisión al sentenciado.

Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Transversal 5C No. 3-18 barrio Quintanares, Agrupación Residencial Acacias 1 en Soacha Cundinamarca. Celular 3118529371, a favor de JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ.**

5.1. Sobre la Competencia

Una vez ejecutoriado el presente auto, se ordena por la Secretaría del Juzgado **REMITIR** las diligencias al homólogo de Soacha Cundinamarca, a quien por competencia le corresponde la vigilancia de lo que resta del cumplimiento de la pena impuesta al infractor.

6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 5.532 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejército EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una Secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la prisión domiciliaria.

Por último se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

“... los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»⁷, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

... las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley... (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

“...6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad...”⁸

⁷ Ibídem.

⁸ CSJ T 102248



De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado **JOSE DAVID GARCÍA FERNANDEZ** reúne los requisitos estipulados en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000, motivo que lo lleva a acceder la petición invocada.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *“desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional”*.⁹

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo de 2021 autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso *“suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive*, debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento.

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se presentó en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá.

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de 2021 y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

⁹ C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Nuevamente se presentaron nuevos actos de vandalismo y en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021. En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año anterior nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

Del mismo modo con el personal que contamos (juez, secretaria, asistente social, asistente administrativo y oficial mayor (a partir de noviembre de 2020) para la carga laboral el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la situación jurídica del sentenciado.

7.- DECISIÓN

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. RECONOCER a **JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ** identificado con C.C. No. 79.524.861, redención de pena por trabajo en equivalencia a **TRES (3) MESES y DOCE PUNTO CUARENTA Y TRES (12.43) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, el 1 de enero al 31 de marzo de 2022, del 1 de abril al 30 de abril de 2022 y del 1 de mayo al 30 de junio de 2022, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO. RECONOCER que hasta la presente fecha el interno **JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ** identificado con C.C. No. 79.524.861 tiene descontado por pena física más las redenciones reconocidas un total de **50 MESES y 7.78 DÍAS**.

TERCERO. CONCEDER la sustitución de la prisión en establecimiento penitenciario por la prisión domiciliaria instituida en el artículo 38G del Código Penal, al sentenciado **JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ** identificado con C.C. No. 79.524.861, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

CUARTO. COMISIONAR al Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, a fin de que se sirva notificar personalmente la presente decisión al interno **JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ** quien se encuentra recluso en dicho penal.

QUINTO. Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Transversal 5C No. 3-18 barrio Quintanares, Agrupación Residencial Acacias 1 en Soacha Cundinamarca. Celular 3118529371, a favor de JOSE DAVID GARCIA FERNANDEZ.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SEXTO. DISPONER que una vez el sentenciado suscriba la diligencia de compromiso prevista en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y constituya la caución prendaria impuesta, el Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, proceda a lo pertinente respecto a la reseña del sentenciado ante el Establecimiento Carcelario competente y el traslado a la dirección **Transversal 5C No. 3-18 barrio Quintanares, Agrupación Residencial Acacias 1 en Soacha Cundinamarca. Celular 3118529371** bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

SEPTIMO. Una vez ejecutoriado el presente auto, se ordena por la Secretaría del Juzgado **REMITIR** las diligencias al homólogo de Soacha Cundinamarca, a quien por competencia le corresponde la vigilancia de lo que resta del cumplimiento de la pena impuesta al infractor.

OCTAVO. Envíese copia de esta decisión al director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, para que forme parte de la hoja de vida del condenado y se tome atenta nota de ello.

NOVENO. Se ORDENA por la secretaria del Juzgado PROCEDA a notificar de la presente decisión a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON ROGUERA PINILLOS
JUEZ